

ECUADOR **Debate**

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinoza, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Fredy Rivera Vélez

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: S/. 110.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 10

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 40.000

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Fax: (593-2) 568452

e-mail: Caap1@Caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

PORTADA

Magenta Diseño Gráfico

DIAGRAMACION

Sonia Navarrete

IMPRESION

Albazul Offset



ISSN-1012-1498

ECUADOR DEBATE

FLACSO - Biblioteca

50

Quito-Ecuador, agosto 2000

CARTA DEL DIRECTOR

PRESENTACION

COYUNTURA

Nacional: Recuperación a pesar de la dolarización y el ajuste/ 7 - 26

Wílma Salgado/

Política: Ecuador: el terror y la neolengua/ 27 - 36

Fernando Bustamante

Conflictividad socio-política: Marzo 2000 - Junio 2000/37 - 42

Internacional: Temas de debate sobre la política económica y el Desarrollo/ 43 - 52

Marco Romero

Debate del Estado social/ 53 - 66

Libardo Sarmiento Anzola

TEMA CENTRAL

Ecuador: del ajuste tortuoso al ajuste dolarizado.../67 - 104

Alberto Acosta

Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento/ 105 - 120

Diego Borja

Norte/sur y Globalización: nueva dimensión de la pobreza/ 121 - 148

José Sánchez Parga

Experiencias y agenda pendiente de las "reformas de segunda generación" en el Perú/ 149 - 170

Jürgen Schuldt

Insostenibilidad ecológica y social del "desarrollo económico" y la brecha norte-sur/ 171 - 204

José Manuel Naredo

Percepciones ciudadanas hacia la democracia y las instituciones políticas en los países andinos/ 205 - 218

Flavia Freindemberg

Descentralización del Estado y poder local: presupuestos teórico
Analíticos/ 219 - 240
Hernán Ibarra

ENTREVISTA

Ecología política y globalización
Entrevista a Alain Lipietz. Por María Fernanda Espinosa, Fredy Rivera y Marc
Saint Upéry/ 241 - 258

PUBLICACIONES RECIBIDAS/ 259 - 268

DEBATE AGRARIO

Las pequeñas cooperativas rurales: surge un nuevo actor económico/269 - 290
Milton Maya

ANALISIS

Pinochet: Economía, Política, Historia/ 291 - 322
José Valenzuela Feijóo
El abismo de la pobreza: Quito 1988-1989/ 323 - 334
Jacqueline Peltre Wurtz

CRITICA BIBLIOGRAFICA

La dolarización de cristal/ 335 - 338
Por: César Montúfar

LOS CINCUENTA NUMEROS DE ECUADOR DEBATE/ 339 - 364

BIBLIOTECA

POLITICA

Ecuador : el terror y la neolengua

Fernando Bustamante

El discurso del "peligro inminente" está conformado por varias hebras convergentes, que parecen tener por objetivo convencer a la opinión pública ecuatoriana de la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en la frontera norte, y al mismo tiempo, de escalar el involucramiento del país en las luchas que afligen al vecino colombiano.

Retórica y Amenaza

Los últimos meses han presenciado una agudización del debate en torno al problema de seguridad del Ecuador en su frontera norte. Este fenómeno es el resultado de la confluencia de una serie de eventos "objetivos" o simbólicos, que han puesto al país en el predicamento de tomar postura frente al conflicto civil que afecta a Colombia.

Estos eventos han sido, a saber: la firma e implementación del acuerdo que entrega derechos de uso sobre la base aérea de Manta a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), el debate internacional y colombiano en torno al llamado "Plan Colombia", y la posible participación del Ecuador en este plan, y, finalmente, la agudización de la lucha entre los grupos alzados en armas y el Gobierno colombiano, que ha resultado en la expansión de las áreas bajo control de estos grupos y un creciente reconoci-

miento doméstico e internacional a su papel y status "cuasiestatal".

Es digno de llamar la atención, sin embargo, que toda la preocupación cuidadosamente fomentada por ciertos importantes medios de comunicación y por algunas autoridades ecuatorianas, sobre la seguridad de la frontera norte y el posible "rebalse" de la guerra civil colombiana hacia nuestro territorio, no tiene como contraparte hechos importantes en el terreno mismo. Aparte de algún inflado incidente de bandolerismo en la amazonía ecuatoriana, en el cual por ventura aparece involucrado algún ciudadano colombiano, la situación habitual en las fronteras no ha variado mucho respecto a la que ha sido tradicionalmente en los últimos cincuenta años de forzosa convivencia nacional con la violencia doméstica de los vecinos del Norte. En otras palabras, el deterioro de la situación de seguridad, que fundamentaría un incremento de la

alarma pública en torno a la relación fronteriza con Colombia, ocurre sobre todo y ante todo en las mentes y en los mundos discursivos de los protagonistas del debate, pero, en cambio, parece tener relativamente menos que ver con lo que acontece efectivamente en el terreno. Se habla de "posibles", "eventuales", "previsibles" aumentos de la violencia en la frontera o de amenazas igualmente virtuales sobre la seguridad del país, pero, al menos por ahora, todo ocurre en un mundo ideal de temores que se proyectan como realidades ya materializadas. El problema es que mientras los temores discursivos pertenecen al mundo de la retórica, las contramedidas propuestas o contempladas pueden fácilmente, y tienen la capacidad, de ser muy reales y concretas y, lo que es peor, producir exactamente los efectos en función de cuya prevención han sido justificadas.

Orwell en el Ecuador

El discurso del "peligro inminente" está conformado por varias hebras convergentes, que parecen tener por objetivo convencer a la opinión pública ecuatoriana de la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en la frontera Norte, y al mismo tiempo, de escalar el involucramiento del país en las luchas que afligen al vecino colombiano.

En primer lugar está el tópico del narcotráfico: de acuerdo con esta

retórica, el negocio de las drogas que florece en Colombia, y las actividades conexas de las mafias de traficantes, amenazan con invadir al país y convertirlo en área primordial de operaciones. Por otra parte, los planes para vigorizar la lucha contra el narcotráfico podrían llevar a los carteles de la droga a buscar refugio en el Ecuador, y hacer del país una base privilegiada de operaciones. En este sentido, sería, por lo tanto, ineludible que el país aumentara su participación en la lucha antinarcóticos y cooperara más estrechamente con los Estados Unidos en esa empresa. La cesión de la base de Manta ha sido justificada y explícitamente está dedicada exclusivamente a labores de vigilancia sobre el narcotráfico. De esta forma, la participación ecuatoriana sería tan solo parte de una cooperación cuasipolicial. Las fuerzas estadounidenses involucradas estarían tan solo llevando a cabo operaciones de inteligencia antidelictual.

Hasta ese punto todo parece ser bastante inocuo. El problema estriba en la forma como el narcotráfico es semantizado por los Estados Unidos y por muchos actores oficiales o por los medios de comunicación locales. La palabra clave es el término "narcoguerrilla": los diplomáticos y funcionarios estadounidenses insisten en que su único interés es lograr la cooperación del Ecuador en una serie de operaciones contra la droga. La asistencia financiera y militar que

Washington ofrece es presentada como estrictamente focalizada a estas labores de inteligencia e interdicción de una actividad delictual. El problema comienza precisamente con el uso del termino "narcoguerrilla". La idea es que los grupos armados colombianos (especialmente las FARC y el ELN) están estrechamente ligados y forman una entidad única con las mafias traficantes. De esta forma, el combate contra las drogas implicaría necesariamente un enfrentamiento con las guerrillas insurgentes. Se ha hecho un lugar común, irreflexivamente aceptado, que la guerrilla es igual a la droga. Si se acepta esta ecuación, la lucha cuasipoliciaca contra una forma de delito internacional remata necesariamente en una lucha contra las fuerzas rebeldes. Si el Ecuador se involucra en la lucha antinarcóticos colombiana, debería lógicamente terminar enredándose en la guerra civil y debería convertirse en enemigo de las FARC y otros grupos similares.

Por cierto que la neolengua de la narcoguerrilla pasa por alto que los vínculos de los combatientes colombianos con los traficantes son solo una instancia del involucramiento del conjunto de la sociedad colombiana con esa industria. Los guerrilleros tratan con las mafias de la misma forma que todos los grupos de poder, el Estado, los sicarios, los paramilitares, la empresa privada y las fuerzas de seguridad lo hacen. Los guerrilleros se involucran

con las mafias por ser colombianos, no por ser guerrilleros. En ese sentido podría hablarse de un narcoEstado, de unos narcoparamilitares, de una narcoempresa, de una narcopolicia etc.

La operación semántica a la cual de manera goebbelsianase nos ha acostumbrado,, deja todo esto de lado y crea un lazo ontológico entre grupos guerrilleros y traficantes: los hace equivalentes y además específicamente equivalentes. Pero la consecuencia ya señalada es que toda lucha antinarcóticos puede ser y es desde ya una lucha antiguerrillera. Es por ello que el discurso estadounidense se torna inquietante tras su tranquilizadora fachada "policiaca". La lucha antidrogas se halla ya profundamente politizada y toma el carácter de una cruzada antisubversiva. Ello ya está por otra parte contenido en la manera como en los Estados Unidos se ha concebido el negocio de las drogas, a partir de los años ochenta. En dicho país se ha convertido en un lugar común tácito que las actividades de los contrabandistas de sustancias prohibidas tienen la capacidad de destruir a la sociedad misma y de debilitar a sus instituciones. Se trata, pues de un peligro para la seguridad del Estado, de una agresión a la existencia misma de la nación y de su forma de vida. El combate contra este negocio, ya no es un mero asunto de salud pública, o de seguridad ciudadana. Por ello, el traficante (al margen de sus personales

motivaciones), es un enemigo de la nación misma, y por ello puede y debe ser tratado como "ejército enemigo irregular". Esto hace mucho más fácil la asimilación del delincuente mafioso al guerrillero. Después de todo, ambos atentan en contra de la seguridad nacional, y parece muy obvio que siendo sus metas convergentes, su asociación sea natural.

Es preciso recalcar de qué manera el lenguaje constituye la realidad: la popularización del término "narco-guerrilla" es un acto político de creación de un mundo y de unas estructuras de plausibilidad muy claramente orientadas por una estrategia que permite combatir en un mismo gesto y en un mismo movimiento a fenómenos otrora pertenecientes a lógicas muy distintas e independientes.

Existe la posibilidad de que un segundo término de uso frecuente en este contexto vaya camino a correr igual suerte orwelliana: se trata de la palabra "refugiado". Esta última empieza a asociarse al mundo discursivo de la "infección". La cadena simbólica que convierte a ciertas víctimas de la violencia en potencial peligro ante el cual el Estado debe movilizar recursos policiales y militares es la siguiente:

Los desplazados corresponden a una proyección de la sociedad colombiana más allá de las fronteras. Traen consigo o pueden traer consigo

todas las contradicciones y los conflictos de su sociedad. Más aún, el hecho de haber sido desplazados por la lucha antidroga (o antiguerrillera) revela ya una posible complicidad: si sus áreas de residencia han sido atacadas, fumigadas, bombardeadas o invadidas, es muy posible que ello haya ocurrido porque en ellas se llevaban a cabo actividades subversivas delictuales. Considerando los lazos entre las mafias, las guerrillas y la población, nada raro sería considerar que al menos algunos (sino muchos) de estos desplazados eran ya parte de las redes de apoyo o complicidad con los enemigos. Al trasladarse a otro país (Ecuador), ellos traerían consigo el "germen" de la violencia y del delito. El refugiado se convierte a priori en un sospechoso, en un posible enemigo, y como tal debe ser objeto de vigilancia, de acciones policiales, de cuarentena. Su presencia no es ya un mero problema humanitario, es un problema estratégico. El temor o terror a este refugiado parte de la solapada creencia de que es un virtual guerrillero, traficante o delincuente. Por tanto, los desplazamientos de población que se esperan como resultado de la aplicación del Plan Colombia, no solo resultan en una carga para los organismos de ayuda para desastres o para las instituciones humanitarias del Estado, sino que justifican a priori un despliegue de vigilancia militar y policial reforzado en las zonas de llegada y acogida.

La Paradoja de la Seguridad

Un aspecto muy interesante del discurso de la "alarma", es que aquellos peligros frente a los cuales habría que precaverse, son en buena parte resultado de la lucha en contra de sus causas: la temida invasión infecciosa de refugiados, se explica como consecuencia esperada de la aplicación del Plan Colombia (que está abrumadoramente sesgado hacia las acciones militarpoliciacas). La posible escalada de la violencia de los carteles de la droga, es represalia y contramedida defensiva frente a acciones organizadas, planeadas y tal vez incluso implementadas desde territorio ecuatoriano o por fuerzas de seguridad ecuatorianas, la posible extensión de las actividades de las guerrillas hacia el Ecuador, es resultado de la escalada bélica contra ellas, y del posible apoyo ecuatoriano (aunque sea indirecto) a esas acciones. De esta forma, el peligro surge en casi todos los escenarios de la aplicación misma de políticas destinadas a destruir la fuente del peligro.

Es curioso que este rasgo de la propuesta terrorista que parece querer convertir al Ecuador en un protagonista del conflicto colombiano, haya pasado algo desapercibida en el debate político interno. Es posible que esto se deba a otro truco semántico (ya insinuado): se trata de la presentación del problema como ya existente. En la forma de

envolver retóricamente el tema, queda la sensación de que las FARC ya están operando en territorio nacional, de que los refugiados ya están llegando, que los narcotraficantes ya han hecho del país un centro privilegiado de operaciones. De ser así entonces el involucramiento del país en las medidas destinadas a combatir, reprimir, vigilar, encuadrar y "normalizar" a estos sujetos ya no es una posible causa de todos estos efectos, sino que aparece virginalmente posterior a su eclosión. Después de todo, si los citados efectos ya se han producido sin que medie una acción ecuatoriana en algún sentido; toda medida y acción a partir de ahora será capaz de contribuir a desencadenar los problemas de seguridad que sirven de legitimación a estas mismas medidas.

Este parece ser otro efecto "anestésico" del terrorismo asociado al tema colombiano: obliterar toda huella de los posibles lazos de causalidad entre ciertas políticas propuestas y ciertos efectos nocivos, que las harían posteriormente ineludibles. Algo así como un medicamento que causa la enfermedad que está destinado a curar.

El Terror como "Cabildeo"

Resulta en este punto interesante especular sobre las razones que pueden estar moviendo a ciertos sectores nacionales a apoyar este terrorismo retórico (pero cargado de consecuencias prácticas). Después de

todo no es fácil imaginarse que las autoridades, diplomáticos y militares nacionales dejen de ver los peligros de convertir al Ecuador en un Estado "de la línea del frente" en el avispero colombiano. Sin embargo, las palabras y acciones de más de alguno parecen precisamente encaminadas en ese sentido.

Entender esta posibilidad, con todo lo de irracional que en apariencia tiene, nos debe llevar por fuerza al mundo de las "razones de la sinrazón". Personas perfectamente cuerdas y bien intencionadas pueden verse confrontadas con una estructura de temores, esperanzas, ilusiones y ambiciones que pueden perfectamente dar cuenta de conductas aparentemente autodestructivas.

Aunque es prematuro aventurar explicaciones, pueden sugerirse algunas posibles líneas de reflexión. El caso de la Base Aérea de Manta puede ser muy ilustrativo: existe evidencia de que el Gobierno del Presidente Mahuad acogió con gran premura la solicitud estadounidense para utilizar esa instalación en sus operaciones de inteligencia, a cambio de ciertas promesas de apoyo ante organismos financieros internacionales. En otras palabras, Washington se comprometió a interponer su enorme influencia en dichos organismos, a fin de que se diese un trato "suave" al Ecuador en las negociaciones encaminadas a la firma

de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, y a conseguir financiamiento para los desesperadamente urgentes planes de recuperación económica y fiscal que el Gobierno de entonces (y el actual) estaban tratando de poner en marcha. Por el contrario, una negativa hubiese llevado a Washington a una posición mucho más dura, con consecuencias extremadamente graves para la economía y la estabilidad política del país.

Desde la perspectiva de la estructura de incentivos que enfrentaba (y todavía enfrenta) el gobierno ecuatoriano, se puede fácilmente entender el acto de "realismo" geopolítico que pudo haber determinado la riesgosa cesión de la base de Manta. El problema económico del Ecuador es de una extremada gravedad y urgencia, en cambio las posibles consecuencias desafortunadas de un papel ecuatoriano en el avispero colombiano, son a futuro, poco claras y eventuales. Además de ello, pueden tener un impacto periférico y que no afecte sino ciertas regiones poco pobladas y apartadas del país. Adicionalmente, siempre cabe la esperanza de que la base de Manta pueda funcionar como un disuasivo, más que como una carnada para los distintos grupos violentos que participan el conflicto colombiano. Y, finalmente se puede especular con la posibilidad de que Estados Unidos incremente su garantía estratégica al Ecuador en caso de verse este envuelto en la violencia del vecino.

Puesto en otros términos, el acuerdo sobre la base de Manta puede parecer al menos en primera instancia como racional, considerando la extrema vulnerabilidad políticoeconómica del Estado nacional. Este acuerdo es un intento de defender la estabilidad de las instituciones y de la economía del país, no frente a eventuales grupos guerrilleros o narcotraficantes, sino frente a sus propias y graves debilidades políticas domésticas. Representa una manera de hacer aún más importante para los Estados Unidos, la defensa de la estabilidad y de la gobernabilidad internas. Se ha mencionado en el debate reciente como el citado acuerdo puede convertir al Ecuador en rehén del Plan Colombia y de los avatares del conflicto civil colombiano; pero no se ha señalado lo suficiente, que esta lógica tiene un revés: ella liga más estrechamente a la política subregional de los Estados Unidos a la suerte de los gobiernos "estabilizadores" y "modernizadores". Ahora es mucho más importante que antes para Washington que el Ecuador se mantenga estable y en paz, y que sus Gobiernos mantengan una cierta básica continuidad.

Estados Unidos ha invertido en la gobernabilidad ecuatoriana mediante este acuerdo de cooperación militar y con ello se ha hecho "socio" de un proyecto de estabilización que las elites locales tratan de consolidar aunque sea de tumbo en tumbo. Ello puede ayudar a explicar también la extrema lenidad

reciente del sistema financiero internacional y de los organismos económicos como el FMI, con la extrema falta de seriedad y de rigor con que se han llevado a cabo los esfuerzos para ordenar la economía y la caja fiscal en este país. En efecto, no se ha resaltado lo suficiente la sorprendente paciencia del Fondo y del Banco Mundial frente a las promesas no cumplidas, a las metas siempre cambiantes, a objetivos muy poco ambiciosos, a la permisividad con que se lleva adelante el ajuste de la economía ecuatoriana, a la moratoria parcial de la deuda, a la inestabilidad de las políticas, a la corrupción estatal y privada y a la incompetencia constituida en norma. Parece estar vigente la consigna de ayudar al Ecuador a como dé lugar y si es necesario haciendo la vista gorda con una cantidad de políticas, decisiones y no decisiones, que en otro momento y en otros lugares hubiesen encontrado muy poca comprensión de la comunidad financiera internacional.

La cooperación con los Estados Unidos en temas de seguridad tiene este paradójico carácter: es síntoma de la debilidad de la soberanía ecuatoriana, pero al mismo tiempo le proporciona a su Estado una fortaleza y una capacidad de chantaje internacional muy desproporcionada a su tamaño, medios e importancia absolutas. Dicho en otras palabras: hace de la estabilidad del Gobierno o de la fórmula gubernamental actualmente en vigencia, un interés

cuasipúblico de la comunidad internacional, o al menos, del hegemon que la lidera, y que, en cierta forma, define el contenido del "bien común" de dicha comunidad. De esta forma, el análisis del impacto que el acuerdo de Manta y la posible participación ecuatoriana en el Plan Colombia, puedan tener sobre la seguridad nacional adquiere nuevos matices. La interpretación de las consecuencias de esta política que parece acercarse más al Ecuador a la "línea del frente", requiere que nos preguntemos sobre quienes sufren o pueden sufrir qué impactos. Por ejemplo, la sociedad civil en Manta ha sido más bien favorable al acuerdo, que podría alentar la economía local a cambio de molestias que a nadie preocupan realmente (las que generalmente están asociadas a la presencia de un personal militar foráneo y muy bien financiado), en cambio podría pensarse que la perspectiva de los habitantes de áreas fronterizas, o de ciertos centros urbanos metropolitanos podría ser menos eufórica al respecto.

Producir "estigmas"

Otro aspecto que puede permitir comprender mejor el entusiasmo de ciertos sectores frente al peligro, estriba en ciertos beneficios simbólicos potenciales que un papel nacional en la violencia colombiana podría llegar a tener: es muy factible intentar repetir internamente la operación neolingüística realizada con la guerrilla y el

narcotráfico. Si puede convencerse a la población y hacer verosímil frente a la opinión pública la asociación entre estos dos actores, puede también esbozarse una segunda maniobra semántica análoga: ligar la guerrilla colombiana a sectores políticos internos. Esta maniobra permitiría la demonización de quienes sea plausible y conveniente mostrar como "colaboradores" domésticos de la amenaza foránea. Sería muy conveniente y cómodo poder desarrollar un campo de significados que permitiesen una dúctil identificación ontológica entre grupos nacionales a los que se quiere reprimir, desprestigiar o descabezar, con actores de la violencia colombiana ya previamente demonizados. Ciertos políticos, sobre todo ligados al PSC, han hecho en el pasado varios intentos de ligar retóricamente a una presunta o posible izquierda extralegal ecuatoriana con la guerrilla Colombiana, e incluso con el narcotráfico. Si pudiese demostrarse que los grupos alzados en armas operan dentro del Ecuador, podría también, con mucha facilidad, vincularse a elementos nacionales con sus actividades, haciéndolos fácil blanco de un asesinato moral, que, como sabemos, es con frecuencia el prelude de otros tipos de asesinato. La izquierda ecuatoriana podría verse entonces enfrentada a una situación de extrema vulnerabilidad, y quedar sometida a una vigilancia cultural, política y militar sin precedentes. Por ejemplo, no hay razones para suponer imposibles

intentos de ligar a movimientos étnicos minoritarios a la dinámica de la violencia, autorizándose, con ello, algo que hasta ha carecido por completo de piso de legitimidad: convertir a estos movimientos en peligros inminentes a la seguridad interna y externa del Estado.

Hay o no quienes conscientemente deseen hacer esto y lo planeen, la semántica del Plan Colombia y la neolengua que ha inventado a la narcoguerrilla crearían, de facto, una posibilidad simbólica de llevar a cabo esta maniobra de temibles consecuencias políticas. Los eventuales sectores políticos interesados en esto, podrían llegar a pensar que la violencia que el país padecería, en tal caso, estaría en condiciones de serles de provecho. Después de todo, siempre hay quienes pueden considerar la violencia un mal menor, sobre todo si en su lenguaje y moralidad corrientes ya existe, al menos, el hábito de la violencia verbal y emotiva.

Conclusión

El debate en torno a la postura ecuatoriana frente al problema Colombiano, se ha planteado casi siempre como un debate geopolítico. En el presente artículo se ha querido, en cambio, resaltar el carácter retórico de la batalla que se libra. Esta batalla es también, y tal vez, lo es en primer

término, un enfrentamiento en torno a la definición de un mundo de símbolos y de categorías constitutivas del "mundo de vida". Se trata ante todo de definir qué es lo real y como debemos situarnos frente a lo real. Tras toda batalla de este tipo acecha el peligro de la mala fe y de la insinceridad. Resaltar las maniobras y los intereses que pueden dar cuenta y razón de tales maniobras puede ayudarnos a caminar por los campos minados políticos que se abre a nuestra vista, y hacerlo de manera más segura. La seguridad y sus problemas, revisten entonces, un carácter diferente al convencional: no se trata de detectar peligros y amenazas reales, sino de entender los peligros y amenazas de una forma de construir simbólicamente la realidad.

A veces hay más terrores escondidos en nuestras palabras que en las selvas de la lucha irregular, y antes de enfrentarnos a guerrillas que disparan, podemos indagar en los dardos encerrados en una semántica y en un discurso que pueden de manera muy concreta producir el terror e instalarnos en él. La primera seguridad es aquella encerrada en la forma que tenemos de constituir el mundo en nuestras mentes, luego, y en consecuencia, se despliegan los problemas materiales de esta seguridad.

Ciencias Sociales

Revista de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas

Junio del 2000

18

II Epoca

El alzamiento popular del 21 de enero y sus implicaciones para la democracia en el Ecuador
Rafael Quintero

La decadencia política de un estado sin ciudadanía
Pablo Celi

La "antipatria" febreescorderista: una aproximación al discurso político de León Febres Cordero
César Montufar

Los movimientos indígenas latinoamericanos y la construcción del orden político cristiano
Angel Casas

Globalización y caducidad de las bases nacionales de la política
Julio Echeverría

Paradigmas contrapuestos en la Democracia
Rafael Romero

La noción funcional de sistema en la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer
Francisco Estrella

Descentralización y gobiernos intermedios en el Ecuador
Marco Velasco

Género e investigación científica en las universidades ecuatorianas
Silvia Vega

Suscripciones:

Escuela de Sociología y Ciencias Políticas,
Universidad Central del Ecuador
Ciudadela Universitaria. Teléfono (5932) 558847 Fax: (5932) 565822
Correo electrónico: jeechever@uio.satnet.net
Quito - Ecuador